



REPUBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN
SALA QUINTA DE DECISION LABORAL

Proceso: Ordinario Laboral Primera Instancia
Radicación: 05001-31-05-018-2018-00611
Demandante: Aldemar Antonio Ruiz Isaza
Demandado: Colpensiones
Asunto: Apelación y Consulta Sentencia
Procedencia: Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín
Ponente: Sandra María Rojas Manrique

Temas: PENSIÓN ESPECIAL DE VEJEZ POR ALTO
RIESGO -ALTAS TEMPERATURAS, INTERESES MORATORIOS

Medellín, junio diecisiete (17) de dos mil veintidós (2022)

En la fecha, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados JULIO RAFAEL TORDECILLA PAYARES, VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE, como magistrada sustanciadora, procede, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, a decidir el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante, así como el grado jurisdiccional de consulta, en favor de Colpensiones, respecto de la sentencia proferida por el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín, el 11 de marzo de 2022, en el proceso ordinario laboral de primera instancia instaurado por el señor ALDEMAR ANTONIO

RUIZ ISAZA en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES. Radicado 05001-31-05-018-2018-00611-01.

1.- ANTECEDENTES

1.1.- DEMANDA

El señor ALDEMAR ANTONIO RUIZ ISAZA, llamó a juicio a COLPENSIONES, pretendiendo se declare que está bajo la cobertura del régimen de transición establecido en el artículo 8 del Decreto 1281 de 1994, remitiéndolo en transición al Acuerdo 049 de 1990, en consecuencia, se ordene el reconocimiento y pago de la pensión especial de vejez por haber trabajado en exposición a altas temperaturas, a partir de 27 de febrero de 2012, con las mesadas adicionales, ajustada al 90% del promedio de los últimos 10 años o el de toda la vida si le fuera más favorable, asimismo, que se condene al reconocimiento y pago de intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

Los supuestos fácticos que apoyan las anteriores pretensiones, se sintetizan en que el demandante trabajó para la Siderúrgica de Medellín S.A., desde el 15 de diciembre de 1980 hasta el 13 de julio de 2003, tiempo equivalente a 1177 semanas, en el cual desempeñó el cargo de electricista II, III y electricista experto, cumpliendo sus labores en el área de acerías y laminación, las cuales son consideradas como de exposición a altas temperaturas, conforme lo certificó el director de relaciones laborales el 4 de julio de 2003, cargos que igualmente fueron catalogado como de carga pesada y de exposición a sobrecarga térmica, mediante informe de investigación, higiene y seguridad industrial llevada a cabo el 4 de septiembre de 1995 por funcionarios del ISS.

Se expuso, que Colpensiones le certifica al accionante un total de 1255.86 semanas, sin que se evidencie el pago de las cotizaciones adicionales por exposición a altas temperaturas, informando igualmente, que el señor Ruiz Isaza prestó sus servicios al Ministerio de Defensa Nacional, entre el 14 de febrero de

1979 y el 30 de agosto de 1980 y que el 23 de noviembre de 2015 solicitó a Colpensiones la pensión especial de vejez, petición que no fue resuelta.

1.2.- CONTESTACIÓN

Por conducto de su representante legal y a través de apoderada, oportunamente la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES dio respuesta al libelo introductorio, aceptando como cierto el número de semanas cotizadas por el accionante, el tiempo de servicio al Ministerio de Defensa y la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión especial de vejez, no siendo cierto que no haya recibido respuesta, pues se le indicó que el formulario estaba incompleto, sin que el actor se hubiera presentado a aclarar inquietudes y diligenciar correctamente el documento. Sobre los demás hechos, indicó que no le consta y que deberán ser probados.

A su vez, propuso las excepciones de inexistencia de la obligación de reconocer y pagar pensión especial de vejez por exposición a alta temperatura; inexistencia de la obligación de pagar intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993; buena fe; imposibilidad de condena en costas y prescripción.

1.3.- SENTENCIA DE PRIMER GRADO

Mediante fallo proferido el 11 de marzo del 2022, el Juzgado de conocimiento condenó a Colpensiones a reconocer al demandante la pensión especial de vejez por actividad de alto riesgo, desde el 27 de noviembre de 2013, condenando a la entidad a pagar la suma de \$176.262.115, por concepto de retroactivo pensional, disponiendo que a partir del 1º de marzo de 2022, Colpensiones continúe pagando una mesada pensional equivalente a \$1.938.645, autorizando a la accionada realizar los descuentos en salud a que haya lugar; absolvió a Colpensiones de las restantes pretensiones y condenó en costas a la administradora.

1.4.- RECURSO DE APELACIÓN

El apoderado del demandante formuló recurso de apelación, respecto de la negativa en el reconocimiento de la pensión desde que el demandante cumplió los 52 años de edad, que fue el 27 de noviembre de 2012, considerando que el análisis jurídico se quedó corto al aplicar el Decreto 1281 de 1994 y descontar, como si fuese aplicable, el Decreto 2090 de 2003, esto es disminuir un año por cada 60 semanas cotizadas a partir de las 1000 semanas, pues al aplicarse el régimen de transición del artículo 6 del Decreto 2090 de 2003, que remite al Decreto 1281 de 1994, debió haberse analizado que en dicho decreto también hay un régimen de transición que era el artículo 8, sosteniendo que debe aplicarse el artículo 15 del Decreto 758 de 1990, disminución de 50 semanas por cada año adicional a las primeras 750 semanas, por ende, el tiempo trabajado en alto riesgo equivalente a 1177 semanas, corresponde a 8 fracciones de 50, para que se conceda la pensión a partir de los 52 años, razón por la cual solicita la modificación de la sentencia de primera instancia, a fin de que se aplique en su integridad el Decreto 758 de 1990 y se aplique tasa de reemplazo del 90%, no discrepando sobre el monto de la pensión establecida por el Juez.

Por otro lado, respecto de los intereses moratorios que fueron negados por no darse respuesta a un requerimiento enviado por Colpensiones, se insiste que nunca se recibió dicho comunicado, además que el mismo es intrascendental y no tiene asidero, toda vez que el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 establece simplemente la mora en el pago de la pensión, no habla de condicionamientos, hay una mora en el pago, por lo que el retroactivo tiene que estar revestido de intereses moratorios, como lo indicó la Corte en sentencia SL 1681 de 2020, intereses que deben reconocerse a partir del 24 de marzo de 2016, cuatro meses después de que se solicitó la pensión.

1.5.- ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

En la oportunidad procesal, se pronunció el apoderado de la parte actora, reiterando los argumentos expuestos en la sustentación del recurso de alzada, a fin de que se modifique la sentencia en cuanto a la fecha de causación de la pensión y los intereses moratorios.

2. CONSIDERACIONES

2.1.- COMPETENCIA DE LA SALA

Inicialmente, debe advertirse que la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, entendiendo que las partes quedaron conformes con los demás aspectos decididos; de conformidad con el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984; los artículos 10 y 35 de la Ley 712 de 2001, que modificaron los artículos 15 y 66A del C.P.L y de la S.S., respectivamente.

De igual forma procede la consulta, en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social que dispone *“También serán consultadas las sentencias de primera instancia cuando fueren totalmente adversas a la Nación, al Departamento o al Municipio o a aquellas entidades descentralizadas en las que la Nación sea garante”*.

2.2.- HECHOS ESTABLECIDOS EN EL TRAMITE DE LA INSTANCIA

Quedaron acreditados en el trámite del proceso y no son objeto de controversia los siguientes hechos:

- Que el señor Aldemar Antonio Ruiz Isaza nació el 27 de noviembre de 1960, tal y como se advierte en la copia de la cédula de ciudadanía obrante a folio 8 del anexo 01 expediente digital.

- Que el actor cuenta con 1282.43 semanas cotizadas en toda su vida laboral, adicionalmente, prestó sus servicios al Ministerio de Defensa Nacional, del 14 de febrero de 1979 al 30 de agosto de 1980, tiempo equivalente a 80.57 semanas, tal y como se desprende de la historia laboral expedida por la demandada, la cual milita a folios 10 a 19 del anexo 01 del expediente digital.
- Que el demandante laboró al servicio de SIMESA S.A., hoy Diaco, desde el 15 de diciembre de 1980 al 13 de julio de 2003.

2.3.- PROBLEMAS JURIDICOS A RESOLVER

Debe verificar la Sala:

¿Si se encuentra ajustada a derecho, la sentencia objeto de consulta proferida por la señora Juez Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín?

¿Si el señor Aldemar Antonio Ruiz Isaza, tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión especial de vejez por alto riesgo, en caso afirmativo, establecer, si el actor es beneficiario del régimen de transición del Decreto 1281 de 1994 y si procede el reconocimiento de la pensión teniendo como fecha de causación y disfrute el 27 de noviembre de 2012?

¿Si hay lugar a revocar la sentencia de primera instancia en cuanto negó el reconocimiento de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, para en su lugar ordenar el pago de los mismos?

2.4.- TESIS

Los problemas jurídicos planteados se resuelven bajo la tesis según la cual, (i) el demandante tiene derecho a la pensión especial de alto riesgo, teniendo como fecha de disfrute el 27 de noviembre de 2012y (ii) no hay lugar al reconocimiento de los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, en consecuencia, la sentencia debe ser MODIFICADA en los numerales primero y segundo y CONFIRMADA, en lo demás, por las razones explicadas a continuación.

2.5.- PREMISAS NORMATIVAS

La pensión especial de vejez para trabajadores que se desempeñen en actividades calificadas como de alto riesgo, fue prevista por el legislador teniendo en cuenta que estos oficios por su peligrosidad en una prolongada ejecución, producen un desgaste orgánico prematuro y disminuyen la expectativa de vida, lo cual justifica que estas personas puedan acceder a la pensión de vejez en una edad más temprana.

Señala el demandante que ha laborado en exposición a altas temperaturas, actividad que se encuentra catalogada como de alto riesgo, conforme lo preceptuado en el numeral 2 del artículo 2° del Decreto 2090 del año 2003.

Igualmente, los artículos 3° 4° y 6° del citado Decreto 2090 de 2003, establecen las condiciones y requisitos para acceder a esta prestación:

Artículo 3°. Pensiones Especiales de Vejez. Los afiliados al Régimen de Prima Media con prestación definida del Sistema General de Pensiones, que se dediquen en forma permanente al ejercicio de las actividades indicadas en el artículo anterior, durante el número de semanas que corresponda y efectúen la cotización especial durante por lo menos 700 semanas, sean estas continuas o discontinuas, tendrán derecho a la pensión especial de vejez, cuando reúnan los requisitos establecidos en el artículo siguiente.

Artículo 4°. Condiciones y requisitos para tener derecho a la pensión especial de vejez. La pensión especial de vejez se sujetará a los siguientes requisitos:

- 1. Haber cumplido 55 años de edad.*
- 2. Haber cotizado el número mínimo de semanas establecido para el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, al que se refiere el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9° de la Ley 797 de 2003.*

La edad para el reconocimiento especial de vejez se disminuirá en un (1) año por cada (60) semanas de cotización especial, adicionales a las mínimas requeridas en el Sistema General de Pensiones, sin que dicha edad pueda ser inferior a cincuenta (50) años.

El artículo 6 del citado decreto, dejó a salvo las expectativas de quienes venían consolidando su derecho, bajo el régimen anterior, estableciendo un régimen de transición pensional, así:

Artículo 6°. Régimen de transición. Quienes a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto hubieren cotizado cuando menos 500 semanas de cotización especial, tendrán derecho a que, una vez cumplido el número mínimo de semanas exigido por la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión, esta les sea reconocida en las mismas condiciones establecidas en las normas anteriores que regulaban las actividades de alto riesgo.

Parágrafo. Para poder ejercer los derechos que se establecen en el presente decreto cuando las personas se encuentren cubiertas por el régimen de transición, deberán cumplir en adición a los requisitos especiales aquí señalados, los previstos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 18 de la Ley 797 de 2003.

2.6. CASO CONCRETO –

2.6.1. Cumplimiento de requisitos para acceder a la pensión especial de vejez por actividades de alto

A fin de verificar si el gestor del proceso laboró en actividades de las catalogadas como de alto riesgo, advierte esta Colegiatura que a folios 9 del anexo 01 del expediente digital obra certificación expedida por el Director de Relaciones

Laborales de Diaco S.A., en la cual se indica que el señor Aldemar Antonio Ruiz Isaza, laboró al servicio de dicha compañía, antes SIMESA S.A., desde el 15 de diciembre de 1980 hasta el 13 de julio de 2003, ocupando el cargo de electricista I, II, electricista experto en laminación de forma operacional, desempeñando sus labores en las áreas de acerías, laminación y ocasionalmente mantenimiento, señalando que dichas áreas y cargos son considerados como de alta temperatura y/o sobrecarga térmica.

Igualmente, a folios 30 a 33 reposa informe de investigación de higiene y seguridad industrial realizado por el extinto ISS a la sociedad SIMESA, el 4 de septiembre de 1995, en el cual se concluye lo siguiente *“Teniendo en cuenta la carga pesada de trabajo impuestas en las actividades realizadas en laminación y acerías, cargos detallados en el presente estudio y considerando los valores obtenidos del índice TCBH, se advierte que los empleados que han trabajado en los cargos descritos, entre 1973 y septiembre de 1995, presentan exposición a sobrecarga térmica”*, estudio en el cual se encuentran incluidos los cargos desempeñados por el actor de electricista I, II y electricista experto en laminación.

En virtud de lo anterior, y pese a que el representante legal de Diaco S.A., en respuesta dada a la solicitud de información, decretada como prueba por el juzgado manifestó que ningún cargo existente en la compañía cumple con los parámetros legales que permita su consideración como actividad de alto riesgo y negó que el demandante haya desempeñado actividad catalogada como tal, a juicio de la Sala si se encuentra acreditada la prestación personal del servicio del actor en altas temperaturas, conforme a la certificación del empleador, antes aludida, y principalmente al informe de investigación de higiene y seguridad industrial realizado por el extinto ISS, concepto que se erige en la prueba idónea para acreditar la actividad de alto riesgo, conforme al parágrafo del artículo 15 del Decreto 758 de 1990, cuya importancia ha sido resaltada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencias como la SL1342 de 2018, en la cual indicó: *“...inclusive para efectos de que procediera el reconocimiento de la pensión especial de vejez, como mecanismo, se establecía un concepto técnico científico de medicina ocupacional que evidenciara que se estaba expuesto a dichas circunstancias”*

Existiendo claridad en lo anterior, se tiene, entonces, que el promotor del proceso acredita un total de 1162.3 semanas laboradas en altas temperaturas, indicando que si bien revisada la historia laboral del accionante se advierte que su empleador SIMESA S.A., hoy Diaco S.A., no efectuó los aportes con los puntos adicionales exigidos por el legislador para actividades de alto riesgo, desde la vigencia del decreto 1281 de 1994, esta situación no puede afectar al accionante, ello por cuanto en primer lugar, se recuerda que con anterioridad al 22 de junio de 1994, fecha de publicación del Decreto 1281, no se exigía la cotización especial, calenda para la cual el señor Aldemar Antonio Ruiz Isaza, contaba con 695.97 semanas laboradas en exposición a altas temperaturas, y en segundo lugar, con relación a las semanas cotizadas desde el 23 de junio de 1994 y hasta el 13 de julio de 2003, se presenta una mora por parte del empleador en el pago de la cotización adicional y ha sido diáfana la jurisprudencia del órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria laboral, en señalar que no puede ser el afiliado quien corra con las consecuencias negativas de las omisiones presentadas tanto por el empleador, como por la administradora de pensiones, que no hizo uso de las acciones de cobro. (véase sentencias SL2070-2020, SL1225-2021 y SL 2173 de 2021)

2.6.2. Régimen de Transición

De lo expuesto refulge con claridad que el promotor del proceso es beneficiario del régimen de transición estipulado en el artículo 6 del Decreto 2090 de 2003, pues al 28 de julio de 2003, contaba con más de 500 semanas de cotización especial, pues las 1169.3 semanas a las cuales hizo referencia la Sala en líneas precedentes, fueron cotizadas al 13 de julio de 2003, señala el párrafo del multicitado artículo 6 del Decreto 2090 de 2003, que el afiliado deberá cumplir además de los requisitos del propio decreto, las previsiones el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, evidenciado que respecto de la aplicación de dicho párrafo tuvo oportunidad de pronunciarse recientemente la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia SL 999 de 2020, en la cual sostuvo

“Ahora, sobre la exigencia establecida por el párrafo del referido artículo, en torno a que se deben acreditar igualmente los requisitos establecidos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que regula la transición de la prestación ordinaria de vejez, debe recordarse que esta Sala de la Corte en la providencia CSJ SL1353-2019, consideró que ello resultaba excesivo al tratarse de un régimen especial y diferente, por lo que se dejó sentado que:

... para la Sala, el párrafo del artículo 6.º del Decreto 2090 de 2003 no acompasa con la regulación de la pensión especial de vejez por alto riesgo y, desde esa perspectiva implica que para ser beneficiario de las prerrogativas transitorias, es necesario acreditar las exigencias del inciso primero de dicho artículo, en cuanto las dispuestas en su párrafo consagran las requeridas para obtener la pensión ordinaria de vejez en el régimen general, toda vez que como se indicó, una y otra son diferentes; interpretación que en virtud del principio de favorabilidad establecido en el artículo 53 de la Constitución Política, es más adecuada con el propósito teleológico de la normativa.

Luego entonces, el actor es beneficiario del régimen de transición consagrado en el artículo 6º del Decreto 2090 de 2003, que a la fecha de su entrada en vigencia exige 500 semanas de cotización en actividades de alto riesgo, puesto que, como quedó visto, para dicha data tenía más de 900 semanas cotizadas, de modo que de acreditar el número mínimo de semanas exigidas en el régimen general de pensiones, tendría derecho a que se le reconozca la prestación especial en los términos y condiciones establecidos en las disposiciones anteriores”.

Criterio que fue reiterado más recientemente en sentencia SL 4330 de 2021, en la cual se indicó: *“Sobre el particular, se destaca que la jurisprudencia de la Sala precisó que este es el único requisito que se exige a los afiliados para preservar el citado régimen transicional, en tanto la exigencia que establece el párrafo del precepto de cumplir también los requisitos para la transición de la prestación ordinaria es desproporcionada y contraria a la finalidad de la prestación, de modo que en virtud del principio de favorabilidad —artículo 53 de la Constitución Política— esa es la interpretación más adecuada con el propósito teleológico de la normativa (CSJ SL1353-2019)”.*

Así las cosas, al actor le es aplicable el régimen anterior, que, para el caso concreto de las actividades de alto riesgo, corresponde al Decreto 1281 de 1994,

normatividad que a su vez estipuló un régimen de transición, en su artículo octavo, el cual dispone:

“REGIMEN DE TRANSICION PARA ACCEDER A LA PENSION ESPECIAL DE VEJEZ. La edad para acceder a la pensión especial de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de esta pensión especial, de las personas que al momento de entrar en vigencia este decreto tenga treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres, o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, serán los establecidos en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados.

El ingreso base para liquidar la pensión especial de vejez referida en el inciso anterior a quienes les faltase menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuese superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida al DANE.

Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuese igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia del presente decreto, el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio delo devengado...”

Bajo dicha preceptiva, se tiene que, si bien el accionante no contaba con 40 años de edad para el 23 de junio de 1994, puesto que nació el 27 de noviembre de 1960, si contaba con mas de 15 años de servicios, concretamente 15 años, 1 mes y 23 días, teniendo en cuenta el tiempo en el cual prestó sus servicios al Ministerio de Defensa Nacional, lo que indica que, le asiste derecho al actor a que su derecho pensional se resuelva bajo las disposiciones de edad, tiempo de servicio y monto de la pensión del Decreto 758 de 1990, llamando la atención de la Sala, que a la quo, concluyó igualmente que el señor Ruiz Isaza, era beneficiario de esta transición y pese a ello, liquidó la prestación con base en el Decreto 1281 de 1994.

Se tiene como el artículo 13 del Decreto 758 de 1990, contempla como requisitos para acceder a la pensión ordinaria de vejez, en el caso de los hombres 60 años de edad y 500 semanas cotizadas en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima pensional o 1000 en todo el tiempo, requisitos que satisface el accionante, y la misma normatividad en el artículo 15, dispone que la edad para el

derecho a la pensión especial de vejez, se disminuirá en un año, por cada 50 semanas de cotización acreditadas con posterioridad a las 750 semanas cotizadas en forma continua o discontinua en la actividad, en virtud de ello, y toda vez que el pretensor cuenta 1162.3 semanas de labores con exposición a altas temperaturas, sobrepasando en 412 semanas, las 750 semanas inicialmente requeridas, es claro, que le asiste el derecho a que la edad mínima pensional (60 años) se disminuya en 8 años, y por lo tanto, su derecho pensional debe reconocerse a partir del 27 de noviembre del año 2012, tal y como lo reclama el apoderado recurrente, precisando que no opera el fenómeno prescriptivo en los términos de los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social, toda vez que el accionante elevó reclamación a Colpensiones el 23 de noviembre de 2015, interrumpiéndose la prescripción y la acción ordinaria laboral fue radicada el 9 de noviembre de 2018.

Cuantía de la prestación

En cuanto al monto al cual debe de ascender la pensión, bajo la égida de la consulta, realizó el Despacho las operaciones de rigor, atendiendo lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, encontrando como el IBL de toda la vida ascendió a \$1.513.195 y el de los 10 últimos años a \$1.580.640, valores que resultan inferior a los determinados por la falladora de primera instancia, no obstante, el juzgado no anexo al expediente las liquidaciones, no siendo posible determinar el origen de dichas diferencias. En cuanto a la tasa de reemplazo a aplicar, la misma corresponde al 90% y no a la fijada por la cognoscente de primer grado, que lo fue del 66.54%, atendiendo a lo anterior, procede la Sala a liquidar el retroactivo pensional al cual tiene derecho el accionante, mismo que corresponde al siguiente:

RETROACTIVO PENSIONAL				
Año	IPC	# mesadas	Valor pensión	Total Retroactivo
2012	2,44%	2 m, 3 d	\$ 1.422.576	\$ 2.987.409
2013	1,94%	13	\$ 1.457.287	\$ 18.944.729
2014	3,66%	13	\$ 1.485.558	\$ 19.312.257

2015	6,77%	13	\$ 1.539.930	\$ 20.019.085
2016	5,75%	13	\$ 1.644.183	\$ 21.374.378
2017	4,09%	13	\$ 1.738.723	\$ 22.603.404
2018	3,18%	13	\$ 1.809.837	\$ 23.527.883
2019	3,80%	13	\$ 1.867.390	\$ 24.276.070
2020	1,61%	13	\$ 1.938.351	\$ 25.198.561
2021	5,62%	13	\$ 1.969.558	\$ 25.604.258
2022		5	\$ 2.080.247	\$ 10.401.237
TOTAL			\$ 214.249.272	

En consecuencia, deberá modificarse el numeral segundo de la sentencia confutada, en el sentido de ordenar a Colpensiones reconocer y pagar al demandante como retroactivo pensional, la suma de \$214.249.272, el mismo que comprende las mesadas causadas entre el 27 de noviembre del 2012 y el 31 de mayo del 2022. Asimismo, para que partir del 1° de junio del 2022, continúe reconociendo una mesada pensional por valor de \$2.080.247, encontrándose ajustada la orden de la a quo de autorizar a Colpensiones a que realice los descuentos en salud desde que el demandante adquiere el estatus de pensionado.

Intereses moratorios

Los mismos se encuentran regulados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993:

“INTERESES DE MORA. A partir del 1° de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta Ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago”.

Igualmente, el Decreto 656 de 1994, en su artículo 19, dispone que las administradoras cuentan con un término que no puede superar los 4 meses, para resolver sobre las solicitudes relacionadas con pensiones de vejez e invalidez, de ahí que en principio son procedentes los intereses moratorios a partir del 24 de marzo de 2016, tal y como lo reclama el apelante, toda vez que la solicitud de reconocimiento del derecho pensional se elevó el 23 de noviembre de 2015. Sin embargo, encuentra esta Colegiatura acertada la decisión de la a quo, de negar los

intereses moratorios, pues quedó acreditado que con antelación a la reclamación efectuada por el accionante, Colpensiones procedió mediante comunicación del 23 de noviembre de 2015, a requerir al demandante a fin de que subsanara inconsistencias presentadas en el formulario diligenciado, toda vez que el mismo, estaba incompleto y con algunas inconsistencias en la información reportada, informándole que, ello era necesario a fin de continuar con el trámite y que una vez corregidas dichas inconsistencias, se reiniciará dicha gestión, así consta en el archivo identificado como *GEN-RES-CO-2015_11292678-20151123043522*, obrante en el anexo 02 del expediente digital, sin que se acredite que el accionante hubiera atendido dicho requerimiento.

Frente a este punto de disenso, sostuvo el recurrente que el requerimiento nunca se recibió, afirmación que fue desvirtuada por Colpensiones, toda vez que en el expediente administrativo aportado, anexo 02 del expediente digital, reposa la constancia de entrega de la referida notificación, en la Carrera 43 A #34-95, local 206, dirección que corresponde a la informada por el apoderado judicial en el escrito de demanda en el acápite respectivo a las notificaciones, advirtiendo, que si bien se consigna en la demanda como número de local 299 y no 206, en la guía de la empresa de correo, se dejó la constancia de que recibió Daniela y se consignó con la firma el abonado telefónico 4443318, número que igualmente corresponde al reportado por el vocero judicial del accionante, por lo que se concluye, que el requerimiento efectuado por Colpensiones, si fue debidamente recibido, y toda vez que, se reitera no se acredita que el demandante hubiera procedido a subsanar las deficiencias de la solicitud, no hay lugar a imponer condena por intereses moratorios.

Procede si la indexación ordenada, toda vez que la misma constituye un factor que compensa la pérdida del valor real de los dineros que en su oportunidad debieron pagarse, ya que, en países inflacionarios como el nuestro, la moneda pierde su valor adquisitivo, por lo resulta procedente confirmar dicha condena.

Sin costas en esta instancia.

3.- DECISION

En consonancia con lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

FALLA:

1.- Se **MODIFICA el numeral primero** de la sentencia de primera instancia proferida el 11 de mayo de 2022, por el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral instaurado por el señor ALDEMAR ANTONIO RUIZ ISAZA en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, en el sentido de que la pensión especial de alto riesgo, se reconoce a partir del 27 de noviembre del año 2012.

2.- Se **MODIFICA el numeral segundo** de la sentencia, en el sentido de que la condena por concepto de retroactivo pensional, asciende a la suma de \$214.249.272, el mismo que se causó entre el 27 de noviembre del 2012 y el 31 de mayo del 2021. Asimismo, para indicar que partir del 1° de junio del 2022, Colpensiones deberá continuar reconociendo una mesada pensional por valor de \$2.080.247, sin perjuicio de los incrementos anuales aprobados por el Gobierno Nacional.

3.- Se **CONFIRMA** en las demás partes, la providencia objeto de apelación y consulta.

4.- Sin costas en esta instancia.

5.- Se ordena la devolución del expediente digital, con las actuaciones cumplidas en esta instancia, al Juzgado de origen.

El fallo anterior será notificado a las partes por Edicto de conformidad con el numeral 3° literal d) del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y el auto AL 2550 del 23 de junio de 2021, proferido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados,


SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE


JULIO RAFAEL TORDECILLA PAYARES


VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO